

La gran jubilación

Millones de personas se acercan a los 65 años en esta década sin relevo generacional y servicios básicos como la enseñanza o la sanidad están en riesgo

Se prevé el retiro de la mitad de los profesores universitarios y un tercio de los sanitarios y sólo el 12% de la Administración tiene menos de 40 años

P.39 JOSÉ MARÍA ROBLES / EDITORIAL P.03



**EL HUECO
QUE DEJA
LA GRAN
JUBILACION**

**LA FALTA DE RELEVO
GENERACIONAL
AMENAZA EL FUTURO
DE SERVICIOS
PÚBLICOS ESENCIALES**

**POR
JOSE MARÍA
ROBLES**

**ILUSTRACIÓN
DE JOSETXU
L. PIÑEIRO**



«Quiero mandar un mensaje de tranquilidad: en España no hay un problema de renuncia», dijo Yolanda Díaz a mediados de mayo. La vicepresidenta segunda del Gobierno rechazaba así cualquier paralelismo con la Gran Dimisión, el terremoto que desde hace dos años sacude el mercado laboral de EEUU y que sólo en 2021 se tradujo allí en el abandono voluntario de casi 50 millones de empleos. Un éxodo masivo espoleado por la insatisfacción y la falta de expectativas postpandémicas, sobre todo entre los *millennials* y la generación Z.

Díaz se quitaba de encima la sangría americana como quien espanta un bicho, pero lo cierto es que el número de profesionales españoles que dejaron sus trabajos por iniciativa propia se disparó en los cuatro primeros meses de 2022, hasta alcanzar en abril los 5.467. Es la cifra más alta desde que se elaboran las estadísticas de afiliación de la Seguridad Social (2001). El anterior máximo histórico databa de septiembre de 2007, cuando 4.762 empleados se *autodespidieron* en plena euforia económica propiciada por el ladrillo.

Mientras EEUU lidia como puede con la Gran Dimisión, en España está pasando desapercibido otro fenómeno de un impacto socioeconómico colosal: la Gran Jubilación. La mitad de la plantilla de la Seguridad Social y la Función Pública se retirará a lo largo de esta década. El mismo porcentaje de profesores universitarios permanentes cesará su actividad en dicho periodo. Y cerca de un tercio de los profesionales de la Medicina dejará de prestar servicio en cinco años. Sintomática es la situación de los facultativos de la Atención Primaria, aquellos que han padecido la sobrecarga asistencial derivada de la lucha contra el Covid: hasta 12.000 de ellos podrían jubilarse en breve asumiendo incluso la preceptiva penalización en la pensión. Son tres instantáneas de un país encanecido, que

sufre la falta de relevo generacional de los profesionales nacidos en el *baby boom* autóctono (1957-1977) más allá de los trabajos de cuello blanco de la Administración: agricultores, ganaderos, transportistas y obreros de la construcción tampoco tienen quienes les reemplacen a medio plazo. «Hemos llegado a este escenario porque la demografía es la que es»,

La famosa pirámide invertida de la que oímos hablar por primera vez en los tiempos de la EGB ha resultado ser una hoja de guillotina. Sin embargo, la falta de reposición de los seniors no es sólo atribuible al desequilibrio entre nacimientos y decesos. Que profesiones vistas durante décadas como garantía de estabilidad y proyección, y además con vocación de servicio público, susciten

responsabilidades en el débito de profesionales también habría que mirar hacia arriba.

«Se ha producido una mala planificación política. Desde hace 30 o 40 años se sabía lo que iba a pasar», denuncia Jordi Solé, presidente de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca). «No se ha afrontado porque en nuestro sistema político prima el cortoplacismo, se está pendiente del titular de mañana y todo el mundo confía en que el problema le explote a otro. Es un asunto gravísimo, porque reponer la mitad de la función pública en pocos años es imposible, al menos con unos estándares de calidad. Además, con cada día que pasa sin que se tomen medidas sucede lo mismo que con el cambio climático: las soluciones son peores».

«Lo que se debería haber hecho es planificar, planificar y planificar», coincide Gabriel del Pozo, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). «Si sabemos que un profesional de la medicina tarda en formarse un mínimo de 10 años para poder ejercer en el Sistema Nacional de Salud –seis años de carrera, examen MIR y cuatro o cinco de especialidad–, tenemos que anticiparnos».

El envejecimiento de la Administración central es palmario: su media de edad es de 52 años –55 en el caso de los A1 o altos funcionarios– y sólo el 12% tiene menos de 40. Solé, de 57, portavoz de un sindicato que representa a 20.000 funcionarios de carrera de distintas profesiones (abogados, diplomáticos, ingenieros...), ya alertaba el pasado mayo de que casi un millón de trabajadores del sector público está a las puertas de abandonar el servicio. El Gobierno aprobó entonces lo que definió como «la mayor oferta de empleo público de la Historia», con 44.787 plazas, que con las otras cuatro convocatorias hechas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez suman 143.869 plazas. Un 12%

más que con los Gobiernos de Mariano Rajoy, sacaba pecho la ministra portavoz María Jesús Montero.

La oferta –que no incluía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas ni Justicia, con sus propios ámbitos de negociación– pretendía dar respuesta sobre todo a la gestión de políticas públicas y fiscales, transformación digital y cohesión social.

«La situación es preocupante», reconoce pese a todo Solé, jefe de Equipo Regional de Aduanas e Impuestos Especiales en Tarragona. «El ciudadano está viendo las colas que hay para conseguir una cita previa, y vamos a ver retrasos en muchos ámbitos de la actuación administrativa. Se habla siempre de lo que más interesa al ciudadano, que es el servicio público. Pero pensemos en órganos de control como la inspección de Hacienda. Todos sabemos que en ningún país, y menos en los mediterráneos, la disposición a pagar impuestos es muy alta. Cuando empiecen a desfallecer las plantillas de inspectores o merme el nivel técnico de los compañeros entrantes, el servicio se resentirá».

Fedeca ha solicitado a los ministerios de Hacienda y Asuntos Sociales que estudien la posibilidad de prorrogar la jubilación de los funcionarios hasta los 72 años, como han logrado los notarios y registradores de la propiedad recientemente.

No hace falta imaginar lo que podría pasar si mañana usted va a la ventanilla del SEPE y no le atiende nadie porque Ernesto o Pilar, después de toda una vida, ahora se dedican a sus aficiones y a echar una mano con los nietos. No hace falta imaginárselo porque esas situaciones ya se están produciendo. Fedeca informa de que en una de las últimas convocatorias del Cuerpo Nacional Veterinario había 12 candidatos para 15 plazas. Hablamos de funcionarios clave. Seguro que les conoce: son los que se encargan de la seguridad alimentaria. La zoonosis y tal.



La situación en la Sanidad pública tampoco es alentadora. El último *Estudio sobre Demografía Médica*, presentado en 2018 y elaborado por la CESM y la Organización Médica Colegial de España (OMC), reveló que el 31,9% de los facultativos en activo tenía entre 55 y 65 años y otro 9,1% había superado los 65. Traducido: el 41% de los médicos (entre 70.000 y 90.000) se jubilará en 10 años.

Las estimaciones eran alarmantes... y llegó el coronavirus. «Ha provocado que muchos profesionales padezcan estrés, estén sobrecargados y se estén planteando lo contrario de lo que se planteaban antes: pedir una prórroga de jubilación», confiesa Del Pozo, médico

FUNCIONARIOS, PROFESORES Y MÉDICOS: EL VACÍO DE LA GENERACIÓN 'BABY BOOM'

Seniors sin relevo. La mitad de la plantilla de la Seguridad Social y de los docentes universitarios se jubilan en 10 años. Y un tercio de los doctores, en cinco. No tienen reemplazo. «Es gravísimo», alertan

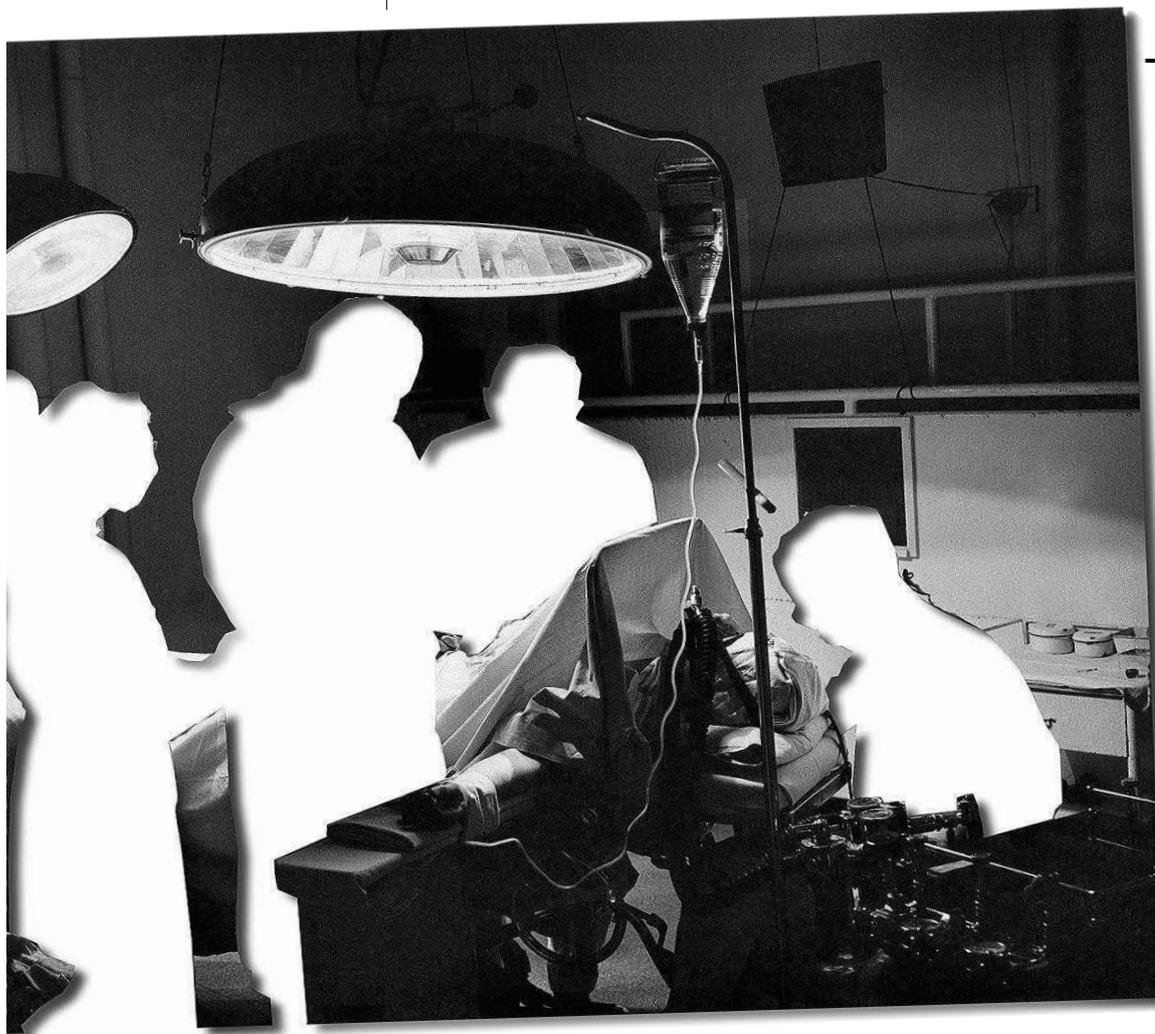
JOSE MARÍA ROBLES

ILUSTRACIÓN DE JOSÉ TITO L. PIÑEIRO

apunta a lo más evidente Emilia Riesco, profesora de Sociología de la Universidad de Salamanca y especialista en envejecimiento. «El índice de fecundidad es muy bajo. Por suerte, tenemos mejor esperanza de vida que hace décadas, a pesar del efecto de la pandemia en la tasa de mortalidad, que nos ha hecho retroceder casi un año a mujeres y hombres», añade la docente.

tan poco interés entre los jóvenes se podría explicar igualmente por la escasa predisposición a la movilidad geográfica o el desajuste entre el sistema educativo y las necesidades productivas. Incluso la digitalización a gran escala, que está engullendo muchas funciones de la burocracia presencial, es susceptible de ser vista como factor disuasorio. Pero a la hora de depurar

FALTA DE REEMPLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO. «SE HA PRODUCIDO UNA MALA PLANIFICACIÓN POLÍTICA, DESDE HACE 30 O 40 AÑOS SE SABÍA LO QUE IBA A PASAR. AQUÍ TODO EL MUNDO CONFÍA EN QUE EL PROBLEMA LE EXPLOTE A OTRO», DENUNCIA JORDI SOLÉ, PRESIDENTE DEL SINDICATO DE FUNCIONARIOS FEDECA



reposición del 100% pasó a ser del 30% en 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero capeando la crisis económica en La Moncloa. La llegada de Mariano Rajoy agravó la situación: un 10% de 2012 a 2014 y un 50% en 2015 y 2016. Para recuperar el replazo total hubo que esperar hasta 2017. En 2021 se incrementó al 110%, pero el agujero ya estaba hecho.

«Se dice que a toro pasado todos somos Manolete, pero cuando se decidió no cubrir sino amortizar las plazas de quienes se iban jubilando era previsible que pasase algo así», expone la profesora Riesco. «¿Qué debería hacerse desde ya? Un análisis con la proyección demográfica a 10 o 20 años y los profesionales que hacen falta en cada uno de los campos. Y, por supuesto, facilitar la formación para que no vuelva a ocurrir lo que ahora. Las plazas en la universidad van a ser cubiertas con ayudantes y contratados, que no digo que sean peores que los profesores funcionarios, pero sí que tienen una trayectoria más corta».

Hay quien confía en la automatización del trabajo como alternativa a la escasez de manos humanas, pero la Gran Jubilación no se atajará sólo con algoritmos. Es posible que no se ataje tampoco sólo con la población autóctona. «Somos cada vez menos y la única posibilidad de cubrir todas las profesiones es con los venidos de fuera. Con una puntualización: la inmigración tiene un índice superior de fecundidad al de la sociedad de acogida durante un tiempo, porque luego se adecúa a éste», avisa Riesco, consciente por supuesto de que la cuestión se ha convertido en baza electoral.

«En el campo está muy claro: si no fuera por los inmigrantes habría problemas mayores. ¿Y quién cuida a nuestros niños, cada vez menos, y a nuestros mayores? ¿Quién atiende en la hostelería? Inmigrantes», resume.

«Hay partidos que están en contra. Dicen: 'Es que los españoles tenemos que tener más hijos'. Pero incluso si los tuviéramos, empezarían a trabajar dentro de 20 o 25 años. Mientras, ¿qué hacemos?».

de familia en Getafe que este año cumple los 65. «Con esta edad, muchos de los compañeros que querían continuar en el sistema están decididos a marcharse –aun perdiendo bastante dinero– porque no aguantan más. Así que se junta todo: los que ya no iban a seguir, los que se van a jubilar porque les tocaba y los que se van a jubilar antes de tiempo. Pero la Administración parece que sólo lo ve ahora. Ahora que llega el diluvio dice: 'Qué mal estamos, la Primaria se nos hunde'. No, no: se nos hunde el sistema».

En el caso de los médicos, y de los sanitarios

en general, hay un factor extra que está dificultando el relevo generacional: la llamada del extranjero y la consiguiente pérdida de talento. En la última década, 31.000 médicos han solicitado el certificado de idoneidad, un documento que permite desempeñar la profesión fuera de España. Y muchos jóvenes están optando por no presentarse al MIR [el examen de Médico Interno Residente] y hacer la especialidad en otro país de la Unión Europea, Reino Unido o EEUU.

«Las condiciones son buenas y las posibilidades de realización son mejores incluso que las que ofrece la propia especialidad aquí,

donde tienes que pasar una criba para elegir la que quieres hacer», se pone Del Pozo en el pellejo de estos emigrantes con alta cualificación. «Hombre, alguien que se forma fuera igual vuelve a España, no digo que no. Pero también hay muchas posibilidades de que se quede trabajando donde se le ha facilitado la formación, se le ofrecen mejores condiciones laborales y en cuanto conciliación familiar y, además, tiene mayor retribución».

«Debería preocuparle al españolito de a pie esta fuga de población activa como efecto colateral de la Gran Jubilación, invisible en el último barómetro del

CIS salvo en el único epígrafe, el 27, que alude directamente a la tercera edad (las pensiones)? «Presumimos de la calidad de una serie de servicios públicos –sobre todo de la Sanidad, referencia mundial– que han ido debilitándose cada vez más», subraya el representante de la CESM. «A mí lo que me preocupa es qué servicio nos van a dar y si los políticos nos quieren inducir a un cambio de sistema. Que sean los propios ciudadanos quienes lo reclamen debido al mal funcionamiento y ellos lo implanten alegando que es la sociedad la que lo exige».

La educación superior es la tercera pata de la Gran

Jubilación. El anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ya señaló a finales de 2021 que un 53,5% del profesorado permanente y el 90% de los catedráticos se jubilarán dentro de 10 años. De ahí que los Presupuestos Generales del Estado 2022 incluyesen a las universidades públicas como sector prioritario. Objetivo: que por cada 10 docentes que se retirasen durante este curso se pudieran contratar a otros 12.

Una tasa de reposición del 120% es una medida excepcional, casi desesperada. Una inyección de adrenalina directa al corazón, como la de *Pulp Fiction*. Y es que la